

15 de septiembre, Año del Libertador General San Martín, 1950

47ª REUNION — 41ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente de la Nación,
y del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE, presidente provisional
del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo
ANTILLE, Armando G.
AVENDAÑO, Arcadio B.
BASALDÚA, Juan Carlos
BAVIO, Ernesto F.
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
ENDEIZA, Victor W.
GIAVARINI, Alejandro Bautista
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRÍQUEZ, Samuel
HERRERA, Ramón Esteban
LORENZÓN, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
MADARIAGA, Eduardo
MENDIONDO, F. Daniel
RAMELLA, Pablo A.
ROLDÁN, Ramón Angel
SCATAMACCHIA, Mauricio Antonio
TANCO, Miguel A.
TEISAIRE, Alberto
VIVIANI, Rinaldo
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, CON LICENCIA:

LAZARO, Juan Fernando de
MATHUS HOYOS, Alejandro
MOLINARI, Diego Luis
SOLER, Lorenzo

SUSPENDIDO:

SANCHEZ RECALDE, Luis N. A.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.

II.—Despachos de comisión.

2.—Proyecto de declaración por el que se hace saber que ninguna persona tiene la representación del Honorable Senado en el exterior. A moción del senador Scatamacchia se resuelve tratarlo sobre tablas. Se aprueba.

3.—A moción del senador Scatamacchia se fijan los asuntos a tratar en el día de la fecha.

4.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos en el proyecto de ley, en revisión, sobre delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Se aprueba y queda convertido en ley.

5.—Consideración del despacho de las comisiones de Defensa Nacional y de Legislación General y Asuntos Técnicos en el proyecto de ley, en revisión, sobre ley nacional de armas y explosivos. Se aprueba y queda convertido en ley.

6.—Consideración del despacho de la Comisión de Justicia en el proyecto de ley de los senadores Soler y Mathus Hoyos por el que se crea un juzgado federal en la ciudad de San Martín, Mendoza. Se aprueba.

7.—Consideración del despacho de la Comisión de Justicia en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley, que le fuera pasado en revisión, sobre

Creación de un juzgado federal en San Isidro (Buenos Aires). Se aprueba y queda convertido en ley.

8.—A moción del senador Scatamacchia se resuelve autorizar a la Presidencia a girar directamente a las comisiones respectivas, los asuntos que remita el Poder Ejecutivo y la Honorable Cámara de Diputados.

9.—Consulta del senador Antille con respecto a la consideración del despacho de la Comisión Bicameral en el problema de la vivienda.

10.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires, a los quince días del mes de septiembre del Año del Libertador General San Martín, 1950, siendo las 11 y 55 dice el

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado (1)

Sr. Secretario (Reales). — La Presidencia informa que, en el día de la fecha, ha comunicado al Poder Ejecutivo la sanción definitiva del proyecto de ley que modifica el inciso e) del decreto 13.641/46 (Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares), ratificado por ley 12.913; y del proyecto de ley que modifica el artículo 130 del Estatuto de la Policía Federal (ley 13.030).

Además, informa que ha recibido el siguiente telegrama:

Mendoza, 14 de septiembre de 1950.
Año del Libertador General San Martín.

A su excelencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Hortensio Quijano.

Congreso Nacional — Buenos Aires.

Tenemos el honor y agrado de informar vuestra excelencia que con singular brillo y profunda emo-

(1) Ver Apéndice de esta sesión.

ción patriótica celebróse ceremonia homenaje Libertador General San Martín y Ejército de los Andes y evocación héroe paraguayo coronel Bogado ante monumento Cerro de la Gloria por parte su excelencia el señor embajador de la República hermana, doctor Angel Florentino Peña, señor ministro consejero, doctor Angel Urbietta Closa, y agregado militar coronel, Herminio Morinigo, acompañados señores gobernador y vicegobernador, teniente coronel administración, Blas Brísoli y Rodolfo Schmidt, general Guillermo Genta, comandante agrupación montaña Cuyo en representación ministro de Ejército, general Franklin Lucero, miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo y calificada concurrencia. Agradeciendo anticipadamente a vuestra excelencia que por su muy digno intermedio reciba debida información la Honorable Cámara.

Saludámosle con muy distinguida consideración senadores nacionales Alejandro Mathus Hoyos, Lorenzo Soler.

II

Despachos de comisión

Sr. Secretario (Reales). — De conformidad con el artículo 100 del reglamento del Honorable Senado, han pasado directamente al orden del día los siguientes despachos de comisión:

JUSTICIA:

En las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre creación de un juzgado federal de sección en la ciudad de San Isidro (Buenos Aires).

—En el proyecto de ley de los señores senadores Soler y Mathus Hoyos por el que se crea un juzgado federal en la ciudad de San Martín (Mendoza).

2

REPRESENTACION DEL HONORABLE SENADO EN EL EXTERIOR

Proyecto de declaración

Por cuanto han cesado las representaciones en el exterior que otorgara oportunamente,

El Senado de la Nación

DECLARA:

Que ninguna persona tiene la representación del Honorable Senado argentino en el exterior del país, ni tampoco está autorizada para hablar en su nombre.

Mauricio A. Scatamacchia. — Alejandro B. Giavarini. — Alberto Teissaire. — Osvaldo Amelotti. — Francisco R. Luco. — Luis Cruz. — Justiniano de la Zepeda. — Miguel A. Tanco. — Ricardo O. Lorenzón. — Ramón E. Herrera. — Ramón A. Roldán. — Armando G. Antille. — F. Daniel Mendiondo. — Pablo A. Ramella. — Victor W. Endeiza. — Felipe Gómez del Junco. — Samuel Gómez Henríquez. — Arcadio B. Avendaño. — Eduardo Madariaga. — Juan C. Basaldúa. — Alberto Durand. — Ernesto F. Bavio. — Rinaldo Viviani.

Sr. Scatamacchia. — Pido la palabra.

Hago moción para que se trate sobre tablas el proyecto de declaración que acaba de leerse.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Buenos Aires.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración el proyecto de declaración. Si no, se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado.

3

MOCION

Sr. Scatamacchia. — Pido la palabra.

Hago moción para que en la sesión de hoy sean considerados los asuntos contenidos en los órdenes del día número 75, 76, 77 y 78.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador por Buenos Aires.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Así se procederá.

4

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos ha considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar; y, por las razones que dará su miembro informante, os aconseja le prestéis su aprobación.

Sala de la comisión, 14 de septiembre, Año del Libertador General San Martín, 1950.

Armando G. Antille. — Ernesto F. Bavio. — Eduardo Madariaga. — Pablo A. Ramella.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(7 de septiembre de 1949)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substraieren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido.

Art. 2º — En las mismas penas del artículo anterior incurrirán, en caso de substraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia, aun sin mediar sentencia civil:

- a) El hijo, con respecto a los padres impedidos;
- b) El adoptante, con respecto al adoptado menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido; y el adoptado con respecto al adoptante impedido;
- c) El tutor, guardador o curador, con respecto al menor de dieciocho años o de más si estuviere impedido, o al incapaz, que se hallare bajo su tutela, guarda o curatela;
- d) El cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa.

Art. 3º — La responsabilidad de cada una de las personas mencionadas en los dos artículos anteriores no quedará excluida por la circunstancia de existir otras también obligadas a prestar los medios indispensables para la subsistencia.

Art. 4º — Agrégase al artículo 73 del Código Penal el siguiente inciso: «5º: incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge».

Art. 5º — La presente ley se tendrá por incorporada al Código Penal.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTECEDENTES

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substraieren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido.

Art. 2º — En las mismas penas del artículo anterior incurrirán en caso de substraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia, aun sin mediar sentencia civil:

- a) El hijo, con respecto a los padres impedidos;
- b) El adoptante, con respecto al adoptado menor de dieciocho años, o de más, si estuviere im-

pedido, y el adoptado con respecto al adoptante impedido;

- c) El tutor, guardador o curador, con respecto al menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido, o al incapaz que se hallare bajo su tutela, guarda o curatela;
- d) El cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa.

Art. 3º—La responsabilidad de cada una de las personas mencionadas en los dos artículos anteriores no quedará excluida por la circunstancia de existir otras también obligadas a prestar los medios indispensables para la subsistencia.

Art. 4º—Agrégase al artículo 73 del Código Penal el siguiente inciso:

- 5º Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.

Art. 5º—La presente ley se tendrá por incorporada al Código Penal.

Art. 6º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Belisario Gache Pirán.

Mensaje

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad remitiendo el adjunto proyecto de ley sobre delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Entre las innovaciones de más profundo sentido social que contiene la Constitución Nacional recientemente sancionada, merecen citarse las que consagran el derecho de la familia y el derecho de la ancianidad. Al definir a aquélla como el núcleo primario y fundamental de la sociedad, establece que el primero de esos derechos será objeto de preferente protección por parte del Estado (artículo 37, apartado II). En cuanto al segundo, prescribe que todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia, atribuyendo al Estado la potestad de demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes (artículo 37, apartado III, párrafo 1).

La concepción políticosocial que inspira la reforma y la nobilísima finalidad perseguida, exigen que esos derechos sean vigorosamente tutelados en todos los ámbitos de la legislación. Incumbe, pues, al Poder Legislativo sancionar los preceptos legales necesarios para hacer efectivos los altos propósitos perseguidos por los constituyentes. No hay duda que la plena y total realización de dichos propósitos exigirá la sanción, en su debido tiempo, de un verdadero código o cuerpos legales especializados en estas importantes materias de la familia, la infancia y la ancianidad. Pero sin perjuicio de ello, es también cierto que urge la pronta sanción de normas tendientes a reprimir penalmente los más graves atentados contra los bienes tutelados por la Constitución y que nada impide que lo sea desde ya. El derecho penal no puede permanecer por más tiempo en postura de indiferencia ante la tarea programada de consolidar la institución de la familia, «núcleo elemental y primario, del que el hombre es criatura y en el cual ha de recibir insustituiblemente la formación sobre

la que construirá todo el curso de su vida», según las palabras vertidas en la reciente Convención Nacional (Diario de Sesiones, página 275).

A ese propósito tiende, precisamente, este proyecto de ley complementaria del Código Penal que el Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad, por el que se crea el delito de «incumplimiento a los deberes de asistencia familiar», previendo sanciones de multa y privativas de libertad para aquellos que maliciosamente se substraieren a las primordiales obligaciones debidas a los componentes del núcleo familiar. Con ello, el Poder Ejecutivo entiende que se fortalecerá con eficacia lo que constituye uno de los pilares de nuestra estructura social.

La incriminación propuesta no importa, por lo demás, una novedad en la legislación comparada más reciente.

Desde que Francia sancionó como delito el abandono de familia por ley del 4 de febrero de 1924, son varias las naciones que, de una u otra manera, siguieron su ejemplo. Así lo hicieron Holanda, Austria, Dinamarca, Inglaterra, España, Italia, Canadá, Noruega, Brasil, Letonia, Alemania, Portugal, Nueva Zelandia, Polonia, Checoslovaquia, Suiza, Estados de Illinois, Virginia, Massachusetts, Carolina, y fué motivo especial de preocupación en el Comité de Protección a la Infancia de la Sociedad de las Naciones (1926), en la V Comisión de la Asamblea de la Liga de las Naciones (1932) y en la IV Conferencia para la Unificación del Derecho Penal (Madrid, 1933). Tampoco entre nosotros se desconoce la conveniencia de reprimir el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pues dicha incriminación ha sido prevista en alguna medida, por los proyectos Coll-Gómez (1937) y Peco (1941) y ha sido propiciada por los camaristas del fuero penal doctor Antonio Luis Beruti («Breve excursión por las lagunas del Código Penal», en «Anales de la Sociedad Argentina de Criminología», 1937) y Ernesto J. Ure (*La protección penal de la familia*, Buenos Aires, 1936).

Por otra parte, no es ésta, en nuestro medio, la primera tentativa de sancionar el abandono de los deberes asistenciales. Así, la ley 10.903, del año 1919, significó ya una reforma fundamental en punto a derechos que muchos concebían como absolutos, al definir a la patria potestad como a un conjunto no sólo de derechos sino también de obligaciones.

Claro está que no han faltado opiniones adversas a la incriminación propuesta, aunque reducidas en número e incapaces de oponerse al arrollador impulso con que los nuevos principios sociales y asistenciales se están haciendo presentes en todos los aspectos de nuestra legislación.

El presente proyecto ofrece un aspecto novedoso, en cuanto se aparta de los ordenamientos legislativos vigentes. En efecto, el texto que se somete a vuestra honorabilidad va más allá que la legislación francesa, pues ésta, aun después de las modificaciones sancionadas en 1942 con el objeto de ampliar las previsiones de la ley de 1924, no alcanza a tutelar muchas situaciones que merecerían protección. En cambio, el proyecto no va tan lejos como el Código Penal italiano, que, al incluir en la incriminación situaciones de abandono puramente moral, permite una intervención del Estado en la intimidad del hogar doméstico que no condice con la sensibilidad y el estilo de vida argentinos.

En verdad, el proyecto adopta, podriase decir, una posición intermedia. Tiene en mira la protección del desamparado en cuanto miembro de la comunidad económica familiar, frente a quienes tienen deberes fundados en elementales sentimientos de solidaridad, de atender a los medios para su subsistencia. Por «medios de subsistencia» se entiende en este proyecto el conjunto de los elementos vitales indispensables para subsistir materialmente —alimentos, vestido, habitación— y no a todos los demás deberes impuestos por la ley a los abuelos, padres, hijos, cónyuges, adoptantes, curadores y tutores. Se agrega a este elenco el «guardador», pese a que el Código Civil no lo menciona entre los representantes legales de los incapaces, en razón de que no es posible desconocer su realidad en nuestro medio y a que la ley 10.903 lo mencionó y el Código Penal de 1922 le reconoció personería en las disposiciones relativas a los menores delincuentes y a la agravación de los delitos de violación, corrupción, estupro y abuso deshonesto. El concepto de guardador, ha dicho la Cámara del Crimen de la Capital Federal, debe entenderse referido nada más que a una potestad de hecho ejercida sobre el menor (*Fallos*, V, 267). La figura del «guardador», no es insólita. Por el contrario, es frecuente en aquellos casos, bastante numerosos por cierto, en que la ausencia del interés económico, hace innecesario acudir a la justicia para la designación de representante legal.

De más está poner en relieve que el delito previsto en el presente proyecto requiere, para su comisión, dolo por parte del sujeto activo. En otros términos, sólo caen dentro de las previsiones legales aquellos que, además de encontrarse económicamente capacitados para cumplir con sus deberes de asistencia, deciden adoptar una actitud esquiva o remisa con pleno conocimiento de las circunstancias. De ahí que los textos proyectados, para evitar toda confusión, no incriminan simplemente a los que «no prestaren» los medios de subsistencia, sino a los que se «substraieren», a prestarlos. Y es claro que, para afirmar que alguien se ha substraído al cumplimiento de los deberes de asistencia familiar, no basta con que haya sido negligente en alguna oportunidad, sino que es menester la comisión significativa de hechos deliberadamente omisivos.

Advertirá vuestra honorabilidad que el proyecto no supedita el ejercicio de la acción al incumplimiento de una anterior sentencia que imponga la obligación de pasar alimentos a ciertos parientes. Tal requisito es teórica y prácticamente criticable, puesto que aquí se trata de un delito cuya objetividad jurídica es la familia, cuya protección se procura y no el buen orden judicial o el respeto a los fallos de los jueces, bienes éstos tutelados en otras normas. Por otra parte el régimen de la condenación judicial previa suele hacer ilusorias o lamentablemente demoradas, en muchos casos, las prestaciones alimentarias. Un eminente jurista italiano, Ugo Aloisi, en una cáustica crítica al sistema francés, expresó que «no se puede decir a una desgraciada prole que tiene hambre: muníos de una sentencia del juez civil, dejad que pase en autoridad de cosa juzgada, esperad todavía que transcurran tres meses y luego acudid recién al juez del crimen». («La protezione penale della famiglia», en «*Riv. di Dir. Penitenziario*», 1934.)

Por otra parte, conviene tener presente que la prestación de «medios de subsistencia», cuyo incum-

plimiento se sanciona penalmente, no puede ser superpuesta o confundida con la obligación alimentaria civil. Mientras aquella prestación se cumple proviendo a las necesidades vitales primarias esta última se regula con un sentido más amplio, teniendo en cuenta la condición social y caudales del alimentado y del prestador de alimentos (Código Civil, artículo 372; Código de Procedimiento Civil, artículo 602, inciso 2º). La diferencia se advierte en forma patente si se piensa que quien no cumple debidamente con la obligación alimentaria civil puede todavía no estar incurso en el delito de cuya incriminación se trata. Es que la obligación de prestar los medios indispensables para subsistir, recién surge frente a un estado de real necesidad, de verdadera indigencia, extremo al que no es indispensable llegar para hacer civilmente exigibles los alimentos. Otra diferencia entre una y otra obligación se advierte si se piensa que el círculo de parientes alcanzados por la obligación impuesta por el Código Civil es mucho más amplio que el de los alcanzados por este proyecto, que no incrimina más que a los integrantes del núcleo central de la familia, y a los que asumen su lugar.

Desde otro punto de vista, los deberes de asistencia previstos en el presente proyecto revisten —según ya se ha señalado— un sentido económico, que permite considerar excluidos de esta represión penal los casos de abandono moral. De tal modo, la ley que ahora se proyecta se distancia netamente del régimen italiano, para el que —como ya se ha dicho— también son punibles esas situaciones. A juicio del Poder Ejecutivo, no es conveniente dilucidar ante los tribunales del crimen problemas reservados a la intimidad del hogar y que tienen suficiente solución en las normas del derecho privado. Las actuales valoraciones de la sociedad argentina rechazarían enérgicamente una incriminación que haría posible llevar a los estrados de la justicia en lo penal —como ha ocurrido en Italia— situaciones como la del esposo que se alejó del hogar conyugal sin dejar por ello de hacerse cargo de los gastos de los suyos, y hasta la del esposo que se negó a compartir el lecho conyugal.

Finalmente, advertirá vuestra honorabilidad que las normas proyectadas superan la deficiencia de las disposiciones del Código Civil en cuanto al alcance de las obligaciones del tutor y del curador, por lo que a los aspectos alimentarios y subsistenciales se refiere. Así, de acuerdo con la legislación vigente, el tutor no tendría —a diferencia de lo que ocurre con el padre (Código Civil, artículo 265)— obligación de proveer, de su peculio, los alimentos requeridos por su pupilo indigente, ya que su deber se limitaría a exigir esa prestación a los parientes y, en ausencia de éstos, a colocarlo (Código Civil, artículos 428 y 430). En verdad, esta manera de concebir las obligaciones legales de los tutores y curadores para con sus pupilos indigentes, así como la ya señalada ausencia de normas en el Código Civil acerca de los guardadores, constituyen una prueba más de la ausencia de sentido social de que adolece, en muchas de sus partes, nuestra ley civil. En efecto, parecería que sólo importara prever con prolijidad las situaciones que se plantean en círculos familiares pudientes, quedando relegados a un segundo plano los problemas de los humildes. Huelga decir que este gobierno considera como un urgente imperativo la tarea de borrar estas diferencias, toda vez que, por una u otra razón, corresponda al legislador enfrentarse con ellas. En este sentido, la legislación proyectada, aunque

destinada a ser incorporada al Código Penal, viene a aclarar suficientemente la situación reseñada más arriba, sin perjuicio de que esta reforma sea consolidada oportunamente, cuando se dé término por el gobierno a la ya iniciada tarea de revisar en todas sus partes al Código Civil.

En síntesis, cabe destacar que los textos proyectados no hacen sino traducir en normas jurídicas puntos de vista acerca de la institución familiar que son unánimes entre los argentinos y que han tenido expresa consagración en la carta constitucional que nos rige.

Con la sanción de este proyecto, vuestra honorabilidad habrá hecho un valioso aporte a la obra social de tan vastos alcances en que está empeñado el gobierno de la Nación con la colaboración necesaria de todos los órganos del Estado.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

Belisario Gache Pirán.

Sr. Presidente. — En consideración.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

El proyecto que consideramos, ha sido aprobado en la Honorable Cámara de Diputados, después de haber sido despachado por la comisión respectiva, por la absoluta mayoría de sus componentes. Fué discutido con extensión, y han dado su opinión favorable al mismo, oradores representantes de los diversos sectores que forman aquella rama legislativa.

Se trata de una innovación, de una ley ampliatoria del Código Penal, que va a sancionar un delito, a crear una figura jurídica delictiva, que se introduce al código después de haber sido estudiada largamente por algunos comentaristas y autores de derecho penal y sancionada por distintas legislaciones de países extranjeros. Debo decir, desde ya, que la Argentina ha estado en mora con la sanción de esta ley, puesto que en Europa se han votado disposiciones especiales que rigen la misma materia, con mucha anterioridad. En Francia, por ejemplo, el abandono de familia ya se sancionó por una ley del 4 de febrero de 1924, que fué ampliada en el año 1942; en Europa, se sancionaron disposiciones iguales en Holanda, Austria, Dinamarca, Inglaterra, España, Italia, Portugal, Letonia y otros países.

Algunos Estados de Norte América también han adoptado respecto de esta materia algunas disposiciones especiales, por ejemplo Illinois, Virginia, Massachusetts y Carolina. Y en América del Sur, el Brasil también ha sancionado disposiciones con carácter de penalidad que abarcan los casos especiales que estamos estudiando.

En nuestro país, dos autores conocidos de derecho penal, los doctores Coll y Gómez, establecieron ya principios de sanción en sus libros y, sobre todo, el doctor Peco, conocido comentarista y autor de un proyecto de Código Penal nuevo que incluyó entre sus disposiciones un

artículo que crea el delito de incumplimiento de los deberes económicos y de asistencia, y da los fundamentos o motivos de esta nueva disposición del código. Más adelante voy a dar lectura de estos fundamentos para que se comprenda el alcance, significado y espíritu de esa legislación.

Con referencia al proyecto que vamos a votar, debo declarar desde ya, que establece la forma de cumplir los principios fundamentales que se incorporaron a la nueva Constitución sancionada en 1949. En esta Constitución se ha declarado que el núcleo primario y fundamental de la sociedad es la familia y que sobre ella debe recaer la protección por parte del Estado (artículo 37, apartado 2º). En cuanto a la ancianidad, se protege, declarándose en el mismo artículo 37, apartado 3º, párrafo 1º, que todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de la familia, atribuyéndose al Estado la potestad de demandar a los familiares remisos y solventes, el aporte correspondiente para el sostenimiento de los ancianos.

Esta concepción políticsocial que indica la tendencia nueva de nuestra Constitución, que se aparta de la protección de los derechos individualistas que establecía la Constitución del 53, demuestra con esta innovación que realmente lo que se debe proteger es a la sociedad, a los derechos sociales, ampliándose el criterio y el fundamento de la antigua Constitución al respecto. Y de acuerdo con ello, el Congreso, que debe dictar leyes que pongan en ejercicio los principios fundamentales de la Constitución, considera el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que estamos tratando.

Por este proyecto, que tiene carácter penal simplemente, se impone prisión de un mes a dos años o multa de 500 a 2.000 pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substraieran a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años o, si tiene más, en caso de que estuviere impedido.

Este es el artículo principal de este proyecto. Es la sanción, la aplicación de una pena a todo aquel que debiendo por sus obligaciones de padre, dar subsistencia, o los elementos para la subsistencia necesaria de su hijo, no cumple, substraéndose a lo que es un deber y una obligación. No es ésa una disposición atinente a las obligaciones análogas del Código Civil. El derecho privado ya ha estudiado y ampliado los derechos y obligaciones que se refieren a los padres de familia. Desde luego, señor presidente, que el concepto de la familia no es, actualmente, el concepto que se tenía en el derecho romano que, como es sabido, es fundamento esencial y antecedente de nuestra disposición civil. En Roma, la familia estaba dirigida, sin discusión, por el padre, el que tenía sobre sus hijos un derecho sin límites, hasta el de condenarlos a la muerte. No había restricción alguna

al derecho del padre de familia. Respecto a la mujer, el marido tenía lo que se llama el *manu mariti*, que era también, un derecho absoluto sobre la mujer. Ella no tenía derecho sobre los bienes de la familia y, ni siquiera, podía entrar en la sucesión llegado el caso. Todos esos conceptos, que eran absolutos, fueron atenuándose; se innovó la ley en España y en la Argentina, en nuestro Código Civil, donde la patria potestad se redujo a los derechos de los padres sobre los hijos, cumpliéndose, también, el deber de alimentación y de educación. Pero hubo de innovarse todavía este concepto de la familia, cuando se dictaron en este país las leyes del patronato, del cuidado de los menores; el Código Civil, la de deberes y derechos civiles de la mujer, que entró a ejercerlos igual que el hombre, aun siendo casada, y que le otorgó cierta libertad para administrar sus propios bienes y le habilitó para ejercer el comercio con independencia del marido si un juez la autorizaba para ello.

Estas innovaciones fueron haciendo desaparecer el absolutismo del dominio del padre sobre los hijos y del marido sobre la mujer. El derecho civil fué cediendo a una especie de propensión a la libertad en el concepto de la familia y en el de la patria potestad.

En el orden penal, sin embargo, no se incorporaron a nuestro código las disposiciones contenidas en proyectos presentados, entre otros, por los doctores Peco, Coli y Gómez. Hasta ahora no ha podido modificarse el código, pero ello no significa que no se puedan dictar algunas directivas complementarias en cuanto al incumplimiento de los deberes de los padres para con los hijos y de éstos para con aquéllos, y aun subsistiendo el concepto de familia; establecer penalidades para el incumplimiento de ciertas leyes de subsistencia, con relación a los tutores y curadores y, lo que es también un poco raro, con respecto a los cuidadores de los menores.

Estas disposiciones han sido discutidas extensamente en la Cámara de Diputados, alguna vez con apariencia de razón, sobre todo en lo que respecta a los cuidadores que, en la ley civil, no han sido reconocidos expresamente, pero que en algunos fallos judiciales se los ha tenido en cuenta. También con relación a algunos menores que han sido confiados a cuidadores con ciertas obligaciones y derechos con respecto al menor que estaba a su cargo.

Pero aquí no se trata de la consideración de la ley civil. Se trata de una ley penal, de una sanción punitiva con referencia a los que no cumplen los deberes que nuestra legislación establece y, sobre todo, en el artículo 19, que acabo de leer, al que se substraen, aun sin mediar una sentencia civil que lo obligue al cumplimiento del deber, a la obligación de dar subsistencia a sus hijos menores de 18 años.

Indudablemente, en ese caso cometerá una infracción a los principios del Código Penal. No es necesario, y esto debe discutirse con cierta extensión, que se diga si este incumplimiento es malicioso, si es, además de voluntario, de mala intención: sino que basta que omita cumplir el deber; y por eso se usa la palabra que el diccionario académico acepta: es decir, que se «substraiga» al cumplimiento de esos deberes, y eso significará la base, el fundamento, el principio de un delito, siempre que haya dolo; porque sin dolo no existe delito en el campo del derecho penal.

Naturalmente que algunos señores legisladores en la Cámara de Diputados quisieron que se introdujeran las palabras que los autores que acabo de nombrar querían que se estableciera: «siempre que haya justa causa» que pueda eliminar el delito, porque se supone, por ejemplo, que el que está impedido o no tiene bienes o fondos patrimoniales, no cae en el delito al no dar la subsistencia al hijo.

Esto puede ser considerado cuando se estudien los casos especiales y cuando deba darse la sentencia que corresponda, según el artículo 19 de esta ley. Pero es natural que basta decir en general que lo que se exige para que exista un delito, es el dolo, elemento substancial de todo delito.

Puede ser que alguien sea acusado por incumplimiento de este deber, y entonces puede presentar las causas, motivos o excusas; y será el juez quien resolverá en definitiva. No es necesario que la ley establezca una causación especial para el incumplimiento o para substraerse al cumplimiento del deber; ya lo dirán los jueces, aplicando el principio que se sanciona en el artículo.

En el artículo 20 se agrega que estas mismas penas del 19, o sea, de un mes a dos años de prisión, o multa de quinientos a dos mil pesos, se debe aplicar al hijo con respecto a los padres impedidos. Se establece aquí que el padre debe estar impedido para que exista el delito. El adoptante con respecto al adoptado menor de 18 años, o de más si estuviera impedido; o el adoptado con respecto al adoptante impedido, caen también sobre la misma pena si cometen el mismo delito por omisión al cumplimiento de sus deberes de familia.

El tutor, el guardador o curador con respecto al menor de 18 años o de más si estuviera impedido, o al incapaz, que se hallare bajo su tutela, guarda o curatela, también cometen el delito que he mencionado anteriormente y a que se refiere el artículo 19. Y además, el cónyuge con respecto al otro no separado legalmente por su culpa, debe ser sancionado con una pena en caso de incumplimiento de sus deberes. Es decir, cuando existe el vínculo matrimonial, se comete el delito; pero si hay una separación y ella es por culpa de quien ha provocado la separación, o

sea el divorcio, también incurre el cónyuge en una pena que se establece en el artículo citado.

En el artículo 3º se aclara que la responsabilidad de cada una de las personas mencionadas en los dos artículos anteriores no se puede excluir por la circunstancia de existir otros parientes que tengan también la obligación de dar subsistencia al menor de 18 años, o si estuviere impedido, de más años. No basta entonces poder alegar y probar que existen otros parientes también obligados.

Las personas que se han mencionado son las que cometen delito por la omisión, evasión o no cumplimiento de sus deberes.

Finalmente, por el artículo 4º se agrega al artículo 73 del Código Penal un nuevo inciso que dice: «Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuere el cónyuge.»

Este inciso se vincula a lo que se llama dentro del Código Penal acciones de carácter privado. Es sabido que las acciones en derecho penal se clasifican en: acciones públicas; acciones de iniciación privada y acciones totalmente privadas. Las públicas pueden ser promovidas por cualquiera del pueblo; las acciones de iniciación privada sólo las puede ejercer aquel que tenga facultad para hacerlo por la ley; y las acciones privadas no las pueden ejercitar sino los damnificados, autorizados expresamente para ello.

Se señala en este inciso que se ha de agregar al artículo 73 del Código Penal el caso de que la víctima fuere el cónyuge. Es decir, solamente en el caso de una acción que deba ejercer un cónyuge se califica de acción privada. Cuando la acción ha de ser promovida por las demás personas, o sea el hijo, el padre, el tutor o el curador, entonces es de carácter público y, puede ser iniciada por cualquiera del pueblo.

Este conjunto de disposiciones crea una nueva figura jurídica penal. Hasta ahora no ha habido más que el propósito de iniciación de esta especie de penas, modificaciones al Código Penal que se han fundamentado por los autores en distintas monografías. Los camaristas doctores Antonio Luis Berutti y Ernesto J. Ure han tratado especialmente estas cuestiones invocando los motivos que existen para la sanción de leyes punitivas al respecto.

Uno de los tratadistas que ha estudiado con mayor fundamento este problema es el doctor Peco, de quien me voy a permitir leer algunas de las razones que daba para crear esta figura delictiva con respecto al incumplimiento de las funciones y deberes que tiene un miembro de la familia.

«La ley —dice este autor— no debe desinteresarse de la abdicación de obligaciones impuestas por la moral y exigibles por el derecho. La ingerencia del Estado en el seno de la familia,

se objeta, es más perjudicial que beneficiosa. La ley penal, se arguye, no debe penetrar en las intimidades del hogar para sancionar hechos solucionables por el derecho civil. Sin embargo, elementales principios de humanidad aconsejan la incorporación de este delito. El derecho penal acude en socorro de la persona desamparada, atendiendo a la conveniencia de exigir el cumplimiento de ciertos deberes. La experiencia alecciona acerca de la insuficiencia de las sanciones civiles para el cumplimiento de las obligaciones de asistencia económica y la necesidad de acudir a las sanciones penales.»

Este autor se refiere a la asistencia económica, vale decir, a la subsistencia y a la entrega de los elementos necesarios al hijo menor o al padre impedido, en su caso. Pero no quiere referirse a lo que en el código italiano se establece sobre las obligaciones de asistencia moral. En esta ley se había excedido un poco la legislación italiana estableciendo que el abandono de la familia, o sea el abandono a deberes especiales en el matrimonio constituía un delito. Claro que era eso entrar en la investigación de la vida de familia, de la vida íntima del hogar. Eso no ha sido aceptado por esta ley modificatoria del código. Esta ley solamente se quiere que se concrete a la falta de subsistencia, es decir, a substraerse al deber de dar subsistencia en los casos que en ella se mencionan, porque ello constituye un delito. Es una falta; pero no es una falta moral, y necesita una sanción punitiva, porque nada más doloroso y más criticable que el abandono de un padre al deber de mantener un hijo. Y esto se encuentra limitado a darle alimento, hogar, casa y vestuario. En ello pueden encontrarse los tres elementos substanciales de lo que significa la subsistencia del hijo. No quiere decir, como el Código Civil acepta, que debe darle también la educación.

Esta ley que estudiamos restringe el concepto a lo material, a la parte económica, a la obligación que consiste en mantener, nutrir y darle un amparo al hijo que ha nacido, que el padre está obligado a cuidar. Lo mismo se ha extendido al tutor, quizá excediendo un poco al concepto de familia, porque no constituye con el pupilo un vínculo familiar, sino una especie de patronato que ha creado el Código Civil para garantizar la moral y la educación del pupilo. Lo mismo se ha dispuesto con respecto al curador...

Sr. Bavio. — Y aun al guardador.

Sr. Antille. — ...y al guardador, que no tiene ningún vínculo de familia, contemplándose para ello una sanción penal. El código con esto me parece que ha de conseguir que se cumpla mejor la ley civil en cuanto a los deberes de protección a los hijos o a los pupilos. Yo creo, y ésta es una convicción personal, que toda pena que se mantenga escrita en el código re-

sultará intimidatoria para ciertas personas para quienes no basta la obligación moral; no es suficiente la conciencia para obligarle a cumplir con sus deberes de cualquier carácter que sean. A veces es necesaria una pena, y basta que exista la misma, escrita, para que, entonces, por el temor de que se aplique esa sanción, se cumplan estos deberes.

El código en esta forma se encontraría complementado manteniendo la unidad de la familia, porque la Constitución que, como digo, tiene fundamento económicosocial, quiere proteger al núcleo familiar, quiere consolidar la unidad de la familia, proteger a la ancianidad y debe protegerla el Congreso por una ley.

Y es esta ley que debemos sancionar, aceptando el texto tal como viene de la Cámara de Diputados, sin ninguna reforma, porque ha sido perfectamente estudiada, ha sido votada sin discrepancias, y porque la comisión, en cuyo nombre estoy informando, no tiene objeción alguna que formular. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

La clásica división del derecho en público y privado parece ya insuficiente para contener las nuevas instituciones o los nuevos planteamientos, podríamos decir, que se hacen en materia de derecho. Y así ha surgido una tercera forma, una tercera clasificación del derecho, que es el derecho social.

Y aunque este concepto no está desarrollado totalmente por los autores, y no se ha elaborado un cuerpo de doctrina perfectamente ajustado, se comprende que para las nuevas instituciones jurídicas, tales como las del derecho laboral e industrial, el nuevo planteamiento que se hace con respecto al derecho de familia, parece indiscutible que corresponde esta calificación de derecho social, porque concretándonos, en este caso, al derecho de familia, vemos muy bien que no podríamos en ningún modo, a pesar de la tutela que pueda corresponder al Estado con respecto a la familia, incluirlo entre los conceptos del derecho público. Tampoco podríamos agruparlo con rigor jurídico dentro del derecho privado exclusivamente.

Ya Vélez Sársfield entrevió este aspecto del derecho de familia, con intuición genial, al citar en una nota a su título sobre el derecho de familia, el concepto de que, por ejemplo, el matrimonio era más que un mero contrato privado, una verdadera institución. Y esta protección, hasta penal, para el resguardo del orden de la familia, tampoco es absolutamente nueva, por cuanto tenemos en nuestro Código Penal la imputación del adulterio, pero no se había perfilado, hasta estos últimos tiempos una tendencia no sólo de la doctrina sino también de la legislación, para enmarcar al derecho de familia dentro del concepto del derecho social.

Un ilustre jurista español, notable traductor de Kelsen, es el que tal vez con mayor acierto

está elaborando esta doctrina del derecho social; derecho social que hay que ubicarlo en el verdadero plano, porque no implica, sino precisamente al contrario, la aniquilación del individuo, sino que revaloriza el concepto social del hombre a los efectos de darle la alta dignidad que realmente tiene. Así dice Legaz y Lacambra, en un ensayo sobre este concepto del derecho social, que: «Al revalorizarse las fuentes de la vida individual —religión y moral— no es sólo la vida personal lo que se vigoriza, es la misma vida social lo que se restaura. Pues la restauración de la vida social no puede venir jamás de categorías y fuerzas puramente sociales, sino de los valores personales —proyectados en su realización hacia los demás hombres— de la caridad y del amor. Este principio está en la base de la filosofía social cristiana, y por eso decía Santo Tomás que por el amor recíproco existente entre los hombres, éstos se prestan la mutua ayuda necesaria para el fin personal en que consiste la sociedad. La sociedad necesita el vigor y lozanía que sólo estas fuentes de la vida personal pueden prestarle, las cuales si por un lado son el mejor dique a la socialización y a la historicificación total, de otro modo son fuentes de otras nuevas fuerzas sociales, pues fortalecen la sociedad al orientar la vida en el sentido del altruismo —etimológicamente tomado—, esto es, hacia el servicio de los demás. Y desvían las inclinaciones del hombre de sus tendencias puramente egoístas y antisociales.»

El derecho social instaura, pues, un perfecto equilibrio entre el hombre y la sociedad, es decir, que procura el desarrollo del concepto social, no por el prurito de crear un ente hipertrofico del tipo social sino sencillamente para que el hombre en ese ámbito social pueda cumplir mejor sus altos destinos.

Un distinguido jurista argentino, Videla Morón, ha recogido estas enseñanzas de Legaz y Lacambra, y con mucha perspicacia ha realizado un esquema completo y substancioso sobre el derecho social. Refiriéndose concretamente al derecho de familia, el doctor Videla Morón dice estos conceptos: «El derecho de familia es, entonces, aquella subdivisión del derecho social formada por el conjunto de normas reguladoras de las relaciones de comunión o integración provenientes de las situaciones jurídicas propias de la familia, cuya existencia se advierte en la realidad jurídica, en un primer estadio (matrimonio, hecho de la unión natural de los sexos, etcétera), con carácter coordinativo, y luego aparece en esa misma realidad, pero en un estadio subsiguiente, con carácter subordinativo (régimen jurídico de la familia, donde la patria potestad, tutela, curatela, filiación, legitimidad, etcétera, forman un verdadero ordenamiento de tipo especial). La existencia de la familia como realidad éticosocial y como insti-

tución jurídica de tipo comunitario no puede discutirse ni negarse.»

De modo, pues, que el matrimonio, la familia, no es un asunto que concierna exclusivamente a los miembros del matrimonio o de la familia, sino que es un aspecto que interesa en alta medida a la vida social, como lo señaló muy bien en su brillante exposición el miembro informante de la Cámara de Diputados, doctor Conte Grand.

Esta ley es una proyección de la Constitución justicialista del general Perón. Por primera vez nuestro derecho público recogía en el cuerpo constitucional los principios relativos al derecho de familia, que ya los habían incorporado con bastante anterioridad casi todas las constituciones de América y algunas de Europa.

He dicho varias veces que una de las funciones del legislador, y del legislador peronista, es traer al recinto legislativo todo lo que se haya dicho en la elaboración de la Constitución justicialista, porque ésta es un fundamento, es como una semilla que tiene que crecer en árbol y dar luego sus frutos copiosos. Y me da la impresión de que todavía no ha penetrado profundamente en el pueblo argentino este concepto de la proyección grandiosa que ha de tener nuestra Constitución.

Sobre este punto del derecho de familia, pronuncio hermosísimas palabras el convencional señor Mende, mi distinguido colega en la convención de entonces. Estableció los fundamentos verdaderos, a mi parecer, del derecho de familia, no sólo en el plano de la filosofía general, sino en el concepto que tiene la familia en la doctrina peronista, según lo señalaba el propio general Perón.

Dijo el convencional señor Mende: «La concepción del Estado y de la sociedad en la doctrina peronista puede resumirse así: el Estado peronista no es individualista ni es colectivista. No es individualista, porque es eminentemente social, y no es colectivista porque es eminentemente humanista. Si no es individualista, porque su concepción es eminentemente social, debe reconocer, y reconoce, que la sociedad, más que una simple unión de personas humanas, es unión de familias humanas, a través de las cuales las personas se incorporan a la sociedad humana para lograr el bien común. Si por otra parte, la concepción peronista de la sociedad no es colectivista porque es humanista, debe reconocer en la persona humana derechos naturales que son inherentes a su condición de tal, derechos que derivan de su misma naturaleza, y que están enraizados en su extraordinaria dignidad, derivada de su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios; y que uno de esos derechos es, precisamente, el de nacer en una familia y de constituir luego él mismo una familia, por medio del ejercicio de otro de sus derechos fundamentales: el derecho al matrimonio.»

Y citaba luego, entre otros muchos antecedentes de orden constitucional, la declaración de Méjico de 1945, en la que se afirmó que la familia como célula social se proclama institución fundamental, y se recomienda que el Estado dicte las medidas necesarias para asegurar su estabilidad moral, su mejoramiento económico y su bienestar social.

Este planteamiento del derecho de familia en el ámbito de lo social, es lo que ha dado motivo a toda esta nueva legislación, que señalaba muy bien el señor miembro informante tendiente a incriminar a aquellos que hacen abandono de las obligaciones derivadas de la familia.

El concepto de la incriminación de estas faltas, cometidas principalmente por los padres con respecto a los hijos, parecería no ser necesario, pero, desgraciadamente, la situación real que se presenta es muy diferente de la que suscita a primera vista la creencia en el sentimiento de los padres con respecto a sus hijos. Y la triste realidad argentina que tenemos que señalar, es que hay muchísimos padres que seducen mujeres y luego las abandonan con sus hijos, y son ellas las que tienen que soportar todas las cargas que derivan de la educación del niño. Desgraciadamente, en este sentido, el porcentaje de hijos naturales en nuestro país, es todavía verdaderamente aterrador. Hay en los hombres, podríamos decir, una inconsciencia y una insensibilidad para comprender este deber, que parecería ser natural y espontáneo en el hombre, que es el afán de cuidar a sus propios hijos; y por eso la ley, sobre todo el artículo 1º, ha de tener una importancia mucho más grande de la que pudiera parecer a primera vista, porque la obligación que señala y cuya falta ha de determinar nada menos que la comisión de un delito, se refiere desde luego a los padres legítimos, pero abarca también a los padres naturales.

Y esto tiene también una influencia de gran valor social. Como muy bien lo señala la Constitución, el Estado debe protección a la familia, y reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. Esta ley es de defensa de la familia, y cuando los particulares son remisos en el cumplimiento de sus deberes entra, entonces, a actuar la acción del Estado, con su poder coercitivo para hacer cumplir lo que las leyes de la humanidad deberían hacer cumplir de manera espontánea y natural.

Y también se vincula esta ley a lo establecido en la Constitución, con respecto a los derechos de la ancianidad, porque dice categóricamente el primer punto, que todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. Establece el principio justo del orden social, que estos derechos corresponden en primer término a los particulares y en defecto o falta de la obligación por

parte de ellos, recién entra a actuar la acción directa del Estado en lo que se relaciona con la asistencia social. De modo tal que esta falta de los padres que he señalado, sobre todo en el caso de los padres naturales, implica una carga para el Estado, porque son los niños abandonados los que obligan a hacer grandes desembolsos al Estado para cubrir las deficiencias sociales en que viven los que son cuidados por sus madres naturales.

Por eso, señor presidente, considero que este proyecto viene a llenar un sensible vacío en la legislación argentina, es un proyecto altamente moralizador, de gran sentido social, y, por lo tanto, eminentemente patriótico, porque tiende a dignificar el núcleo primario de la sociedad, la célula vital del Estado, que es la familia. (*¡Muy bien!*)

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general, el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

Sr. Presidente. — Queda convertido en ley.

5

LEY NACIONAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

—Se lee:

Despacho de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Defensa Nacional (Ejército, Marina y Aeronáutica) y de Legislación General y Asuntos Técnicos han considerado el proyecto de ley, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre ley nacional de armas y explosivos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

De acuerdo con el artículo 100 del reglamento, se dispone que este despacho pase directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 14 de septiembre de 1950, Año del Libertador General San Martín.

Ramón E. Herrera. — *Armando G. Antille.* — *Alberto Teisaire.* — *Eduardo Madariaga.* — *Ernesto F. Bavio.* — *Justiniano de la Zerda.* — *Pablo A. Ramella.*

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(30 de agosto de 1950, Año del Libertador General San Martín.)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Materia de la ley y ámbito territorial

Artículo 1º — La introducción al país, transporte, adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase de dispositivo, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se clasifican como armas de guerra; pólvoras, explosivos y afines; y armas, municiones y demás materiales clasificados de uso civil, quedan sujetos en todo el territorio de la Nación a las prescripciones de la presente ley, sin más excepciones que las determinadas en el artículo 2º.

Exclusiones

Art. 2º — Quedan excluidos de las prescripciones de la presente ley:

- a) Los actos de cualquier índole relacionados con toda clase de armas, materiales y substancias comprendidas en el artículo precedente, cuando fueran ejercitados por las fuerzas armadas de la Nación;
- b) Las armas blancas y contundentes, siempre que no formen parte integrante o accesoria de las clasificaciones como «arma de guerra».

Clasificación del material

Art. 3º — A los fines de esta ley, los materiales mencionados en el artículo 1º se clasificarán en las siguientes categorías:

- 1ª Armas de guerra;
- 2ª Pólvoras, explosivos y afines;
- 3ª Armas de uso civil.

El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación de la presente ley los elementos que integran cada una de las categorías. En los correspondientes a las categorías 1ª y 2ª, se determinarán los «de uso exclusivo para las instituciones armadas», los «de uso para la fuerza pública», los «de uso civil condicional», los «de usos especiales» y los «de uso prohibido».

Piezas sueltas, repuestos e ingredientes

Las disposiciones sobre los materiales comprendidos en esta ley serán aplicadas, en los casos que las reglamentaciones determinen, a las piezas sueltas de que se compongan y a sus repuestos, o a sus ingredientes si se tratara de